



# ICHAN TECOLOTL

*la casa del tecolote*

## AYOTZINAPA

### Y LA CRISIS DEL ESTADO MEXICANO: UN ESPACIO DE REFLEXIÓN COLECTIVA ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL

AÑO 25, NÚM. 293, ENERO 2015  
ISSN 1405-1931

Respuestas locales a la inseguridad y la violencia en Guerrero: las policías comunitarias y ciudadanas

Ayotzinapa, violencia y el sentido del agravio colectivo: reflexiones para el trabajo antropológico

Violencia y militarización en Guerrero: antecedentes de Ayotzinapa

Breve historia de las Escuelas Normales Rurales en la conformación de subjetividades estudiantiles de base campesina ¿Una manera de aparecer a los desaparecidos de Ayotzinapa?

México: una grave crisis de corrupción e impunidad

Derechos lingüísticos, diversidad cultural y escuelas normales rurales en México

Sicarios, homicidas y secuestradores: Estudio sobre los adolescentes que cometen delitos graves en México

Reflexiones desde el CIESAS-Occidente ante la violencia

Recuento de víctimas de la violencia en Nuevo León. A manera de protesta

Ayotzinapa y la crisis de las desapariciones forzadas en México  
Reflexiones desde Nuevo León

Las vulnerabilidades ante tornados en San Cristóbal de Las Casas, son más que menos, por decir lo menos...

VI Coloquio Internacional de la Mixteca en Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca

Inauguración de la Cátedra Jan de Vos CIESAS-Ecosur

"El agua no conoce fronteras" en los hechos. Reunión-Seminario Internacional de Investigadores sobre Agua en San Cristóbal de Las Casas

*Mextilo*. Memoria de la moda mexicana (México, 2014)



**ICHAN TECOLOTL**  
*la casa del tecolote*

ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES  
Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL  
Juárez 87, Tlalpan Centro, México D.F. C.P. 14000

## Colaboradores

### Edición

Ana Luisa Cruz  
[prensa@cieras.edu.mx](mailto:prensa@cieras.edu.mx)

### Asistencia

Alejandro Olivares  
[aolivares@cieras.edu.mx](mailto:aolivares@cieras.edu.mx)

José Antonio Bernal  
[difusion@cieras.edu.mx](mailto:difusion@cieras.edu.mx)

### Diseño

Mario Alberto Vélez

### Formación

Samuel Morales

### Corrección de estilo

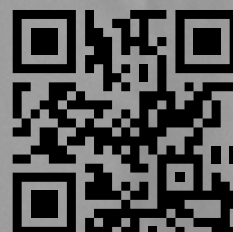
Mario Brito

### Portada


| Mario Alberto Vélez


Las colaboraciones para el próximo número  
de este boletín se reciben hasta el  
viernes 30 de enero de 2015

Consulte más noticias  
del CIESAS en el blog:



[cieras.wordpress.com](http://cieras.wordpress.com)

 /CIESAS DF

 @cieras

Mujer desaparecido de  
Ayotlán, Gro.



ABEL GARCIA HERNANDEZ

# Ayotzinapa, violencia y el sentido del agravio colectivo:

reflexiones para el trabajo antropológico

**Dra. Mariana Mora<sup>1</sup>**

Profesora-investigadora del CIESAS-DF  
mariana\_mora@yahoo.com

Durante los últimos cuatro años he estado investigando los efectos de la violencia, la criminalización de la pobreza y el uso crítico del derecho en la Montaña de Guerrero. Uno de los principales enfoques de mi trabajo de campo consiste en analizar las formas en que la población local, principalmente indígena na savi, nahua, y me'phaa, construyen sentidos de agravio, junto con las formas que interpretan expresiones cotidianas de la inseguridad en la región y el uso que le otorgan al derecho como parte de sus reclamos de justicia. Dicho enfoque me llevó durante los últimos tres meses de 2014 a documentar diversas expresiones de reclamos sociales y populares en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En este artículo me interesa colocar tres reflexiones principales que surgen de esta investigación, con la finalidad de contribuir a la mayor comprensión del contexto actual.

La primera reflexión se refiere a una construcción colectiva del agravio que coloca el caso de Ayotzinapa como parte de una acumulación de violencias y de injusticias de larga data. En la Montaña, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), normalistas e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) entrevistados en octubre y noviembre de 2014 señalan que los sucesos en Iguala representan un acto permisible porque han quedado en la impunidad las desapariciones forzadas durante la llamada "guerra sucia" de las décadas de 1960 y 1970, la masacre de Aguas Blancas en 1995, la masacre del Charco de 1998 y la ejecución extrajudicial de dos normalistas de Ayotzinapa por parte de elementos de la Policía Ministerial (PM) en Chilpancingo el 12 de diciembre 2011, junto con un sinnúmero de casos de ejecuciones y de desaparición forzada. En su totalidad, estos casos reflejan el carácter estructural de la violencia. A su vez, los entrevistados señalaron que si bien existen aspectos específicos de la

historia de Guerrero, particularmente el racismo hacia la población indígena, la presencia casi permanente del Ejército en la vida cotidiana, y la impunidad en la que se siguen reproduciendo cacicazgos, el estado, más que una región excepcional de violencia, forma parte de tendencias más amplias.

En cuanto al papel de los gobiernos locales y de la Policía Preventiva Municipal, mi participación en proyectos de derechos humanos en la región da cuenta de los patrones sistemáticos de violencia policial de las distintas instituciones que operan en la Montaña. Mediante grupos focales realizados en 2013, la población indígena local describió eventos frecuentes en que los efectivos de la policía municipal "actúan como sicarios" del presidente municipal, cumplen con órdenes que protegen sus intereses personales en lugar de prevenir delitos y proteger a la población. Diez días antes de los sucesos en Iguala, el presidente municipal de Tlapa de Comonfort mandó golpear y torturar a un pequeño colectivo de jóvenes porque durante su informe de gobierno iban a levantar en silencio carteles que decían "Un México sin PRI".

La población local narra que efectivos de la policía entran a las comunidades encapuchados, con las armas en alto, y detienen de manera arbitraria a cualquier joven que encuentran caminando por las calles. Sobre todo los jóvenes, describen actos de detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza como parte de las tendencias a tratarlos como si fueran criminales de facto. Un joven entrevistado explicó:

La policía nos acusa de andar de borrachos, aunque no hemos hecho nada. Nos quieren intimidar. Ellos se acercan a nosotros con macanas, como si fuéramos delincuentes pero nosotros sólo estamos caminando por la calle rumbo a nuestra casa o a otro lugar. Sólo por caminar por la noche te detienen, te quitan el dinero o te cobran una multa de 700 pesos. Se inventan cualquier pretexto para detenernos.<sup>1</sup>

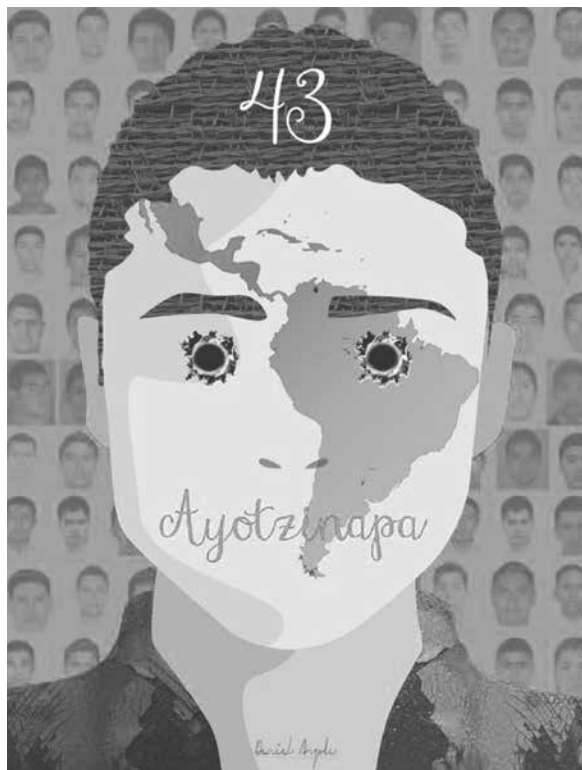
<sup>1</sup> Coordinadora de la línea de docencia, diversidad cultural, etnicidad y poder, CIESAS-DF.

<sup>1</sup> Entrevista realizada a un joven me'phaa de 18 años por Mariana Mora en el municipio de Tlapa de Comonfort, 27 de abril de 2013.

Esta construcción de un agravio colectivo en que el caso de Ayoztinapa se vuelve la expresión más cruda y reciente de una acumulación de violencias, contrasta de manera notable con los discursos de funcionarios estatales que intentan reducir los hechos a un evento aislado, primero acotándolos a un fenómeno municipal, en todo caso estatal, y posteriormente separando el papel del Estado de la delincuencia organizada. De hecho, no fue sino hasta ocho días después de los sucesos cuando la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso; hasta entonces la dependencia había declarado que era un asunto meramente local y de competencia de la Procuraduría Estatal. Cabe recordar que en la conferencia de prensa, el viernes 7 de noviembre 2014, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, intentó deslindar al Estado de los hechos, eliminando de la evidencia presentada la participación de los Policía Preventiva Municipal, silenciando el papel de las Fuerzas Armadas, y dirigiendo la atención exclusivamente a los sicarios de *Guerreros Unidos*.

La complejidad con la que actores políticos locales involucrados en el MPG le otorgan sentido al agravio colectivo y la relación extremadamente ambigua entre la clase política y el crimen organizado genera una serie de retos para el trabajo académico. Nos obliga como antropólogos a responder a la complicada tarea de comprender los procesos que detonan la formación del Estado mediante la producción de líneas divisorias que separan actividades o actos legales de los llamados ilegales. Estas zonas grises que articulan las esferas legales con sus contrapartes pueden tener el efecto de seguir fortaleciendo el Estado, como entidad soberana, que se ve obligado a actuar contra un aparente enemigo externo a vencer, al mismo tiempo que fomenta y reproduce la impunidad en la que operan las instituciones gubernamentales. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas metodológicas y analíticas de la disciplina antropológica para dar cuenta de la formación del Estado en su expresión actual?, ¿cómo analizar los efectos de lo que Achille Mbembe llama una *necropolítica*, es decir una política estatal de la muerte, como parte de la posible formación del Estado mexicano? <sup>2</sup>, ¿de qué manera los hallazgos que surgen de los trabajos de campo de nuestra disciplina abonan a las reflexiones críticas que actualmente circulan como parte de debates públicos más amplios?

La segunda reflexión toma como punto de partida lo expresado por un integrante del MPG en una entrevista reciente, cuando me explicó que para la asamblea del movimiento, Guerrero se encuentra en una “segunda guerra sucia”, no sólo



ilustradoresconayotzinapa.tumblr.com

por la cantidad de desaparecidos, sino por el nivel de actos de violencia estatal ejercidos contra la ciudadanía como si todos fueran criminales. El joven entrevistado explicó que en contraste con las décadas de 1960 y 1970, la situación es ahora mucho más compleja porque:

el narco actúa igual que los paramilitares, solo que hay una gran diferencia, ellos se mueven también por el dinero. Ahora lo que tenemos es un narco-Estado. Nos despojan de nuestras tierras, destruyen lo que tenemos, después nos tratan de reclutar como mano de obra barata para la siembra de amapola, y después nos acusan de criminales. Nos aplastan entre estas dos caras y no nos dan muchas opciones de una salida digna.<sup>3</sup>

Coloco su testimonio en relación con los hallazgos de mi investigación de cuatro años en la que documenté el trabajo de derechos humanos en comunidades nahua, me'phaa y na saví. Tras escuchar las formas en que la población local relaciona expresiones de violencia física con condiciones

2 Achille Mbembe, “Necropolitics”, En *Public Culture*, Winter, 2003 15 (1): 11-40.

3 Entrevista a joven integrante del Movimiento Popular Guerrerense en el municipio de Tlapa de Comonfort. 25 de octubre de 2014.

estructurales de racismo y pobreza, me vi obligada a analizar las condiciones de inseguridad como el efecto articulado de las políticas de seguridad y de desarrollo neoliberal del Estado. En años recientes, algunos de los debates públicos nacionales señalan que las políticas de desarrollo neoliberal han generado mayores condiciones de desigualdad social y colocado a un sector importante de la población en condiciones de precariedad extrema, con pocas opciones de una vida digna. Ello tiende a expulsar a estos sectores de la comunidad política, lo que resulta en su acelerada criminalización.

Considero que desde la antropología contamos con herramientas que pueden complejizar este análisis que de pronto, al separar la esfera de seguridad de la de desarrollo, resulta muy dicotómico. Tras el trabajo de campo en la Montaña de Guerrero llegué a la conclusión de que no es que las políticas neoliberales expulsen a las poblaciones más empobrecidas de la comunidad política —llevando a sectores importantes de la población a ser criminalizados por las fuerzas de seguridad del Estado—, sino que las mismas políticas de desarrollo social generan una desvalorización de las vidas de la población beneficiada al estigmatizarlos y construir el problema de la pobreza, no como algo estructural, sino como un fenómeno que se sustenta en la falta de hábitos y cultura adecuada entre los pobres, particularmente entre los que Emma Cervone llama la *pobreza indianizada*<sup>4</sup>. En ese sentido, los resultados de mi investigación apuntan a que los efectos articulados de las políticas neoliberales de desarrollo social y las de seguridad generan una doble permisibilidad de la muerte en regiones como la Montaña de Guerrero.

En cuanto a la tercera y última reflexión que aquí expongo, el caso de los normalistas de Ayotzinapa nos exige como antropólogos adecuar los marcos teóricos y metodologías de investigación para responder a contextos de violencia generalizada. De entrada surgen una serie de cuestiones de carácter ético-político. Particularmente considero que tenemos la tarea de reflexionar críticamente sobre cómo solicitar testimonios y realizar entrevistas impregnadas de historias personales y colectivas de dolor, e incluso de traumas, evitando abrir heridas, y sin recaer en métodos que terminan revictimizando a la población. De lo contrario, el trabajo antropológico corre el riesgo de convertirse en lo que el académico colombiano Alejandro Castillejo denomina *la economía de extracción del testimonio*<sup>5</sup>. Es éticamente

necesario evitar el morbo del acto espectacular y del espectáculo del dolor.

A su vez, identifico el papel que destaca el método por excelencia de nuestra disciplina, la observación participante, para poder registrar y posteriormente analizar la producción de sentidos y significados de la población local en relación con la desaparición de los normalistas para así trazar geografías sociales, que ubican las repercusiones que sobre la vida cotidiana de los lugareños tiene un estado inobservante de su obligación de brindar seguridad y resguardo a la población. En ese sentido, frente a casos tan dramáticos como el asesinato y la desaparición de los estudiantes, la antropología permite analizar a profundidad las capas, complejidades y ambigüedades de una crisis de Estado mediante la recuperación de fuentes empíricas que rodean el caso mismo.

Por último, el contexto de violencia actual también obliga a reflexionar sobre el papel de la antropología comprometida o lo que algunos autores definen como antropología activista<sup>6</sup>. En lugar de recaer en la antropología de la denuncia, es decir, etnografías en contextos de violencia que documentan las verdades de la población afectada de cara a las representaciones discursivas que producen fuerzas hegemónicas, considero necesario situar nuestras metodologías de investigación de tal manera que abonen a procesos organizativos locales. En los proyectos de investigación comparativo en los que he participado, he aprendido que en contextos de violencia extrema ese fortalecimiento de actores políticos locales muchas veces se expresa en los detalles de la investigación, por ejemplo, con preguntas que apoyan a la persona entrevistada al resignificar y reacomodar experiencias de trauma y de dolor. Aquí las metodologías que le apuestan a la transformación social no se expresan necesariamente en grandes actos, sino en los pequeños intercambios que dan entrada a otras experiencias, que si bien se mantienen vinculadas con el trauma vivido, también lo trascienden.

*la violencia y el recuerdo en la Sudáfrica contemporánea*, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Centro de Estudios Socioculturales-CESO, Ediciones Uniandes, 2009.

6 Véase Speed Shannon, "At the Crossroads of Human Rights and Anthropology: Toward a Critically Engaged Activist Research", en *American Anthropologist*, volume 108, issue 1, pp. 66–76, marzo 2006, y Charles Hale, *Engaging Contradictions. Theory, Politics and Methods of Activist Scholarship*, Berkeley, University of California Press, 2008.

4 Emma Cervone, *Long Live Atahualpa: Indigenous Politics, Justice and Democracy in the Northern Andes*, Durham, Duke University Press, 2012.

5 Alejandro Castillejo Cuellar, *Los archivos del dolor: ensayos sobre*